

Brújula

CIUDADANA

NUEVA ÉPOCA

Septiembre 2018

UN AÑO DE RECONSTRUCCIÓN: “DEUDAS” Y LECCIONES



1. Contexto de la reconstrucción
2. Balance por regiones: CDMX, Oaxaca y Chiapas
3. Experiencias locales y lecciones



BRÚJULA CIUDADANA,

Año 10, Número 102, septiembre 2018, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tepic 83, Colonia Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760, Tel. (55) 55141072,

www.iniciativaciudadana.org.mx/brujulaciudadana
Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2017-080214424300-203, ISSN 2594 0996, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres, Tepic 83, Colonia Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760, fecha de última modificación, 17 de septiembre de 2018.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. El material de esta publicación puede ser mencionado o reproducido siempre y cuando se cite la fuente.

CONTENIDO

UN AÑO DE RECONSTRUCCIÓN: “DEUDAS” Y LECCIONES

01 Presentación
Elio Villaseñor Gómez

1) CONTEXTO DE LA RECONSTRUCCIÓN

04 Aprender de lo vivido, a un año de los sismos ¿En dónde estamos y hacia dónde transitar?
Mónica M. Martínez Cadena

2) BALANCE POR REGIONES: CDMX, OAXACA Y CHIAPAS

11 Volverá a temblar y aquí estaremos
Luis F. Fernández

17 A un año del sismo: el desastre controlado
Laura Georgina Freyermuth Joffre

23 La omisión y el engaño: única respuesta para atender la tragedia en Oaxaca
Eugenia Mata

28 Del terremoto natural al terremoto institucional
Nataniel Hernández Núñez

3) EXPERIENCIAS LOCALES Y LECCIONES

31 La reconstrucción corresponsable en la Sierra Madre de Chiapas
Carlos del Ángel Estrada Marcos

36 Multifamiliar Tlalpan: Reconstrucción sin redensificación y sin deuda
Silvia Angélica Reza Cisneros

40 Jojutla: la tarea sigue siendo titánica
Bosque David Iglesias Guzmán y Óliver Díaz Morales

47 Unión Hidalgo: Mujeres que ‘alimentan’ la reconstrucción
Paloma Villanueva

50 Escaparate ciudadano

PRESENTACIÓN

Elio Villaseñor

DIRECTOR DE INICIATIVA CIUDADANA PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO A.C.

La edición que estamos presentando constituye una mirada crítica a los esfuerzos que se han hecho para atender las necesidades de reconstrucción en las regiones afectadas por los sismos de septiembre de 2017. La idea central es contribuir a la elaboración de un balance sobre el proceso de reconstrucción en general y conocer las iniciativas que se han implementado para este fin en distintas comunidades y territorios del país.

Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 causaron la muerte de 471 personas y dejaron cuantiosos daños materiales, que según datos oficiales requirieron una inversión de más de 7,881 millones de pesos (mdp) orientados al proceso de reconstrucción. Se registró un total de 171,494 viviendas dañadas por los fenómenos naturales (de ellas, 59,866 con daño total y 111,628 con daños parciales).

A un año de estas catástrofes se hace necesario evaluar la forma en que se ha conducido el proceso de reconstrucción y la situación de las poblaciones afectadas, pero lastimosamente, según se constata en los textos de esta edición, la deuda con los hogares afectados es muy alta todavía.

Los daños ocasionados por los sismos fueron cuantiosos en unos mil municipios en total ubicados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Hubo afectaciones en 16,136 planteles educativos en diez entidades (276 con daño total, 4,063 parcial y 10,797 afectaciones menores) y en al menos 1,821 inmuebles históricos y culturales. Las pérdidas económicas, según algunos datos, ascendieron a 2 mil 783 millones de pesos, con afectaciones a 13,218 negocios.

Uno de los temas más problemáticos es la disparidad de información. Muchas cifras en los terrenos de cada localidad no corresponden con los censos oficiales ya que los levantamientos hechos adolecen de muchas deficiencias, ya sea porque no fueron visitados todos los hogares o edificios afectados o incluso porque, usando criterios políticos, se dejó afuera a quienes no formaban parte de los grupos gobernantes en las localidades.

Nos encontramos ante un escenario injusto y lamentable, porque muchas personas damnificadas siguen viviendo en la calle, sus apoyos no han llegado y otros tantos más fueron defraudados con tarjetas sin fondos; en otros casos, la reconstrucción de viviendas ha supuesto la ruptura con sus usos y costumbres e incluso las obras requeridas para restablecer servicios públicos están sin concluirse como es el caso de algunas escuelas, hospitales y mercados.

La situación de indefensión de un gran porcentaje de población afectada es el resultado de la ineficacia de algunos funcionarios públicos y del uso indebido de los recursos, hecho que ocurrió en las pasadas campañas electorales. Como suele pasar en las catástrofes, muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno no han estado a la altura de las expectativas y necesidades imperantes que demandaban políticas públicas precisas, basadas en diagnósticos sectores, y que no estuvieron listas en la emergencia y que incluso hoy siguen haciendo falta.

En este marco muchas organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, del sector privado y de la academia han participado muy activamente y con propuestas viables para atender algunas demandas y necesidades de las poblaciones afectadas. Además, se han construido proyectos interesantes de controlaría ciudadana para exigir que los recursos lleguen a quienes sí lo necesitan. Por otro lado, surgieron iniciativas comunitarias para fortalecer el tejido social y reconstruir sus viviendas tradicionales o para desarrollar proyectos productivos y sustentables. Todo esto se refleja en los artículos que conforman esta edición y que también esbozan los gigantescos retos.

En medio de las adversidades y la ineficiencia de las autoridades, es alentador observar que la solidaridad sigue alimentando muchas propuestas que, desde la sociedad civil, han permitido a algunos afectados reconstruir sus viviendas por medio de proyectos que los convierten en sujetos de su propio desarrollo.

La tarea de responder a los damnificados del sismo del 7 y el 19S sigue presente y, por ello, en este primer aniversario no solo recordamos la fuerza de la solidaridad de los momentos inmediatamente posteriores a las catástrofes, sino que deben seguir encendidas todas las alertas para exigir cuentas claras y sobre todo responder a las necesidades de la población damnificada y garantizarle todos sus derechos.

APRENDER DE LO VIVIDO, A UN AÑO DE LOS SISMOS ¿EN DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE TRANSITAR?

Mónica M. Martínez Cadena¹

MAESTRA EN GOBERNANZA Y DESARROLLO

Son las 5 de la mañana del mes de junio de 2018 en San Francisco del Mar, un pequeño municipio costero con 7 mil 232 habitantes situado en la región del Istmo de Tehuantepec dentro del Distrito de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Me despierta el movimiento brusco de la cama en la habitación de uno de los dos hoteles que hay en el lugar. Busco mi celular mientras pienso en tener suerte de tener señal para confirmar en la App Sky Alert si efectivamente es un temblor. No tengo suerte. Abro la ventana y la madrugada no se inmuta, solo el suelo retumba. En el tiempo que medito entre salir corriendo o permanecer en el cuarto, el movimiento cesa. Me calmo, me lavo la cara y vuelvo a la cama sin poder concebir el sueño de nuevo. Salgo del hotel, aún marcado con números rojos que arrojó el censo. El día inicia con una temperatura de 20 grados y en el transcurso del día llegará a los 40. Se empieza a escuchar el trajín diario de la gente quienes después de los sismos de septiembre de 2017, poco a poco regresan a su normalidad, esa que los llevó a sufrir pérdidas irreparables.

¹ La autora coordinó el Proyecto de apoyo a la recuperación temprana post sismo en México con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este artículo recoge la visión y experiencia personal no necesariamente refleja la visión de la organización.

Foto de Adriana Zehbrauskas/NYT.



2017 será recordado por los sismos registrados en el país el 7, 19 y 23 de septiembre con magnitudes de 8.2, 7.1 y 6.1 respectivamente y los daños que dejaron en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Morelos, principalmente. La respuesta del gobierno mexicano ante el desastre y el modelo de reconstrucción adoptado fue, con sus variantes, el que otros países en contextos similares llevan a cabo: atención a la emergencia, levantamiento de daños en viviendas e infraestructura pública y la implementación de acciones de reconstrucción y de reactivación económica. El gobierno federal activó la

declaratoria de desastre y con ello el acceso a los recursos del seguro catastrófico del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para dar respuesta a los estados afectados. Con la entrega de las tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), se otorgaron los apoyos a los afectados para la reconstrucción de sus viviendas en dos modalidades: a las viviendas dictaminadas con daño parcial se asignó un apoyo de 15 mil pesos y a las de daño total, de 120 mil pesos. Las obras son ejecutadas por las Agencias Productoras de Vivienda (APV) o de Fundaciones autorizadas.



Paralelamente, algunos estados desarrollaron estrategias para afrontar sus retos y cubrir a aquellos damnificados que no se lograron atender por medio del FONDEN. En el caso del gobierno de Morelos, se institucionalizó el Organismo “Unidos por Morelos”², el gobierno de Puebla activó su Plan “Puebla sigue de Pie”³ y el gobierno de la Ciudad de México dio paso a la creación de la “Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente”⁴.

Los estados de Morelos y Puebla, por mencionar algunos, a través de las coordinaciones de Protección Civil han trabajado por años en robustecer los protocolos para atender a la población en caso de desastres como inundaciones, sequías y una potencial erupción del volcán Popocatepetl, pero no con respecto a sismos. Después del sismo de 1985, se pensaba que la Ciudad de México estaba preparada pero el 19 de septiembre de 2017 mostró lo contrario. Fue así como los gobiernos revelaron su condición actual para responder a situaciones de desastres: capacidades institucionales laxas para atender la emergencia y su eventual recuperación post sismo.

² <http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graco-crea-unidos-por-morelos-para-apoyar-la-reconstruccion>

³ <https://megalopolismx.com/noticia/27855/avanza-estrategia-puebla-sigue-de-pie-con-reconstruccion-de-escuelas-tony-gali>

⁴ <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/25/1203452>

¿En qué punto estamos?

La tarea de reconstrucción en el país es liderada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). La estimación inicial de daños emitida por las autoridades ha sido difusa e inconsistente. En julio de este año, la SEDATU dio conocer algunos avances⁵: de las 171 mil 494 viviendas dañadas en el país, 59 mil 866 fueron dictaminadas con daño total, de las cuales 43 mil 827 tiene “un grado de reconstrucción”, con daño parcial se reportaron 111 mil 628 viviendas sin dejar claro el avance de reparación; se reportó que el 96% de las tarjetas Bansefi han sido entregadas cuyo gasto ascendió a los 7 mil 881 millones de pesos. Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP)⁶, de los -aproximadamente- 17 mil 800 planteles educativos afectados en 10 estados, se reportó que, de las 201 escuelas con daños graves, 188 tienen ya un avance de intervención; de las 6 mil 28 escuelas con daños moderados a severos, se avanzó en un 62 % mientras que de los planteles dictaminados con daños menores, que suman 11 mil 619, se atendieron 9 mil

259. Con respecto a los más de 2 mil monumentos históricos registrados con daños en 11 estados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha expresado⁷ que el costo estimado es de alrededor 12 mil millones de pesos cuyos trabajos concluirán en el 2021. A casi un año de los sismos, no se puede determinar el porcentaje de avance en rubros clave como infraestructura pública recuperada, negocios dañados reactivados o cuál es el estatus hoy en día de los 12 millones de damnificados identificados en el país.

Ergo, la evaluación de daños y pérdidas actual aún es inexacta. De manera oficial no es posible obtener cifras concretas, al no contar con un diagnóstico integral de la situación que se traduzca en cuánto costará la reconstrucción en el país y cuánto tiempo tomará. Este es el punto de partida para que se desprendan proyectos de recuperación integrales que contemplen claramente los objetivos que persiguen, líneas de acción, sectores, actores, fuentes de financiamiento, tiempo de implementación, presupuesto y responsables. Esto daría luz a una recuperación de largo aliento. La experiencia internacional muestra que

⁵ <https://www.gob.mx/sedatu/articulos/la-reconstruccion-compromiso-del-gobierno-de-la-republica-hasta-que-termine-la-presente-administracion?idiom=es>

⁶ <https://www.excelsior.com.mx/nacional/sep-apoyara-a-entidades-para-cumplir-con-reconstruccion-de-escuelas/1243874>

después de atender la emergencia ante un desastre, es prioritario realizar una evaluación de daños y pérdidas cuyo objetivo sea “evaluar el alcance completo del impacto de un desastre, definir las necesidades de recuperación y, al hacerlo, servir como base para diseñar una estrategia de recuperación y guiar el financiamiento de los donantes”.⁸ La herramienta de “Evaluación de Necesidades Post Desastre” o “Post Disaster Needs Assessment” (PDNA), desarrollada por el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, ha sido utilizada en países en contextos similares como El Salvador, Chile, Ecuador, Haití, Afganistán, entre otros.

Las pérdidas post sismo son aún más complejas de determinar y en el caso de México, las cifras son inciertas. No se sabe cuánto tiempo perdieron niños y niñas sin ir a la escuela, y cómo van a recuperar esos días, si sucede; la cantidad de personas que perdieron sus empleos o sus medios de vida y, por ende, los ingresos familiares que dejaron de percibir, ¿cómo se afectó el bienestar de estas familias? los negocios sin reactivarse, ¿cuántos son?; el total de personas y familias que aún se encuentran en los albergues, ¿pagaron o siguen pagando renta?, ¿viven con otros

familiares?, ¿qué es de ellos?, ¿cómo están subsidiando estos gastos? El pensar en el daño psicológico de los afectados, derivado del estrés y la ansiedad de haber perdido todo, se cuenta solo en el imaginario.

Hoy en día, las vulnerabilidades en las comunidades afectadas todavía están a la vista de todos, en cuanto más te adentras como en el caso de los municipios de San Mateo del Mar y San Francisco del Mar en Oaxaca, más claros son los impactos: mercados destruidos, monumentos históricos sin atender, mujeres con medios de vida del que dependen toda la familia destruidos, miles de viviendas sin censos y otras más sin empezar trabajos de reconstrucción, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a nuevos sismos.

Los impactos que dejaron los sismos desnudan las realidades en las ciudades y zonas rurales de México, que es la de un rezago económico y social que arrastran por años y se agudiza cuando son golpeados por desastres de origen natural y socionatural, ante la falta de políticas de prevención y de una buena gestión de reducción de riesgos de desastres.

⁸ <http://www.undp.org/content/undp/en/home/climate-and-disaster-resilience/disaster-recovery/post-disaster-needs-assessments.html>

¿Cuáles son los retos de un país de renta media y alta desigualdad como México para que estos daños y pérdidas no se repitan?

Lo primero que hay que reconocer es el déficit de capacidad institucional existente para enfrentar eficazmente procesos de respuesta y recuperación post sismos y qué se puede aprender de otras experiencias internacionales con este contexto. En México, al ser un país de renta media, se podría inferir que sus capacidades institucionales son robustas.

Por tanto, los retos que subyacen en el proceso de recuperación en México van encaminados hacia definir cuáles son los principales efectos (daños y pérdidas) y cuál es el impacto en el desarrollo humano y en la naturaleza que la alta vulnerabilidad frente a los sismos provocó. Para ello es clave una Evaluación de Necesidades Post Desastre que dé pie a la estrategia de recuperación de largo aliento y reconstrucción nacional. En días pasados, quien será el titular de la SEDATU de la administración federal 2018-2024, publicó el lanzamiento de un Programa Nacional de Reconstrucción, lo cual sin duda es una buena noticia.

Algo imperativo para la reconstrucción es hacer un llamado a la Coordinación. Actualmente no hay claridad de quiénes son los

actores nacionales e internacionales involucrados en acciones de reconstrucción en el país y cuáles han sido sus aportaciones. Esta coordinación debe dar luz a un mapeo de actores que armonice las acciones hacia un mismo objetivo y que establezca qué hace cada uno, cómo lo hará, con qué recursos y en qué plazos. Los actores estratégicos con este *expertise* y que pueden contribuir son organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado, organismos internacionales, la banca de desarrollo, los damnificados, entre otros.

Apoyarse en el uso de las tecnologías para desarrollar y actualizar sistemas de alerta sísmica y alerta temprana frente a otras amenazas. A raíz del sismo en Haití en el 2010 una de las acciones centrales fue la realiza-



Foto de Carlos Jasso/Reuters..

ción de mapas de riesgos para identificar las zonas sísmicas de mayor y menor intensidad a fin de evitar que se vuelva construir en los mismos lugares, o bien, se tomen las consideraciones adecuadas para reducir vulnerabilidades. Igualmente, con lo relacionado a las alertas tempranas, estos sistemas se han implementado en varios estados del país con mayor énfasis en la Ciudad de México. Hay “Apps” que se descargan gratuitamente en teléfonos celulares inteligentes como SkyAlert; lamentablemente, en comunidades como San Francisco del Mar y San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, las señales de telecomunicación son débiles y muchas familias no tienen acceso a un celular inteligente. Existen otros métodos más sencillos que pueden adoptarse en comunidades con pocos recursos como la utilización de megáfonos. Vale la pena explorar distintos canales de difusión, pues estas medidas, salvan vidas.

El tema de la reconstrucción de viviendas post sismo es complejo, sin embargo, en el caso de México habría que recoger las lecciones aprendidas y enfocarse en aquellos nudos que fallaron en brindar a los damnificados una certidumbre hacia la seguridad de sus viviendas. Por ejemplo, el censo levantado para dictaminar los tipos de daños de las viviendas generó conflictos entre los sujetos de apoyo e incluso la autoridad local. En los

recorridos por las comunidades, resaltaron la falta de personal calificado para llevar a cabo esta evaluación, las miles de viviendas que quedaron fuera de estos censos y dictámenes que no clasificaban correctamente el tipo de daño de sus viviendas. Esto originó que la ciudadanía y autoridades exigieran un dictamen nuevo⁹. Por otro lado, la inconformidad de familias cuyas viviendas fueron demolidas y les entregaron casas que no reflejaban su identidad cultural, en cuanto a diseño, dimensiones y materiales. Finalmente, el contacto hecho con especialistas en vivienda en contextos post sismo y su apreciación sobre las viviendas demolidas era que, con un adecuado análisis estructural, muchas de esas viviendas pudieron haberse conservado, con la fisonomía y dimensión original, a través de la utilización de técnicas de reforzamiento utilizadas en otros países con similar contexto.

Para concluir, vale la pena reflexionar sobre lo que se puede aprender de lo sucedido. El reto mayor en la recuperación a largo plazo es construir un modelo, que sea transparente y que asegure un puente hacia el desarrollo sostenible y la resiliencia de las ciudades y zonas rurales del país con un enfoque participativo que integre las voces de hombres y mujeres por igual, a fin de sentar las bases para reconstruir mejor y no volver a la normalidad que nos llevó a donde estamos.

⁹ <http://www.jornada.com.mx/2018/01/29/estados/028n1est>

VOLVERÁ A TEMBLAR Y AQUÍ ESTAREMOS

Luis F. Fernández¹⁰

DIRECTOR EJECUTIVO DE NOSOTRXS

Cada que pienso en el sismo del 19 de septiembre del año pasado, no puedo evitar la referencia recurrente en mi cabeza “aquí volverá a temblar”, frase que titula el libro de Ricardo Becerra (cofundador de Nosotrxs y exComisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México) y de Carlos Flores. Con la certeza total de que volverá a temblar en la Ciudad de México, ¿estamos preparados como comunidad para enfrentar un nuevo terremoto? La respuesta tajante es no. ¿Qué han hecho las autoridades hasta hoy para atender la emergencia, la reconstrucción, la resiliencia y la recuperación de la Ciudad de México? ¿Cómo se encuentran los damnificados a un año del sismo? ¿Qué pasaría si vuelve a temblar?



Foto de Tercero Díaz/Cuartoscuro.

¹⁰ @luisffernandez

Estas preguntas han detonado una profunda reflexión en Nosotrxs desde el día después del sismo. El movimiento ha pasado por distintas etapas de participación en la emergencia, en la resiliencia y en la reconstrucción. En la emergencia participamos con brigadas de atención a damnificados en las entidades afectadas e inmediatamente propusimos un Fondo Único para la Reconstrucción y tres de nuestros fundadores participaron en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México (Mauricio Merino, Katia D'Artigues y el Comisionado). Durante el proceso de reconstrucción hemos dado seguimiento a la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos; y ahora, estamos por publicar un trabajo identificando las zonas más riesgosas de la Ciudad, con edificios clasificados como alto riesgo o alto riesgo de colapso que no han sido atendidos, con el objetivo de enfatizar dónde deben estar las prioridades en el proceso de reconstrucción.

El recuento de las acciones del movimiento refleja la evolución de los procesos de atención que ha demandado el proceso de reconstrucción, pero sin duda el horizonte de la recuperación total aún es distante. Las autoridades federales y de las entidades afectadas, así como diversos actores políticos y sociales, han llevado a cabo distintos esfuerzos para identificar a damnificados, para vincularlos a niveles de afectación espe-

cíficos y para detonar procesos de atención; sin embargo, estos esfuerzos no han sido exhaustivos para concluir un censo detallado de daños y damnificados, ni coordinados para evitar duplicidad de esfuerzos, ni eficientes para resolver con la celeridad necesidades de cientos de miles afectados por los sismos.

A continuación hago un breve recuento de las acciones que ha emprendido Nosotrxs y de los hallazgos que nos preocupan como movimiento. La conclusión es desesperanzadora: la total recuperación tardará muchos años más si las autoridades no deciden responsabilizarse del cauce de la política de reconstrucción.

Acciones ante la emergencia y la propuesta del Fondo Único

A horas del sismo, Nosotrxs reaccionó con celeridad y con la lógica de articulación colectiva con la que se fundó el movimiento. En menos de 24 horas, más de 400 personas afiliadas a nuestra organización se movilizaron en brigadas en la Ciudad de México, en Puebla y en Morelos, para brindar apoyo en centros de acopio y en las zonas afectadas. Tras esa experiencia solidaria e inmediata, comprendimos que el tamaño de la tragedia exigía ir mucho más lejos: responder necesitaba —y sigue necesitando— un trabajo

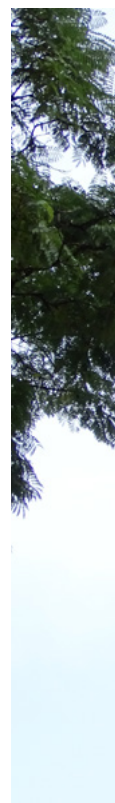




Foto de Adam Jones vía Wiki Commons

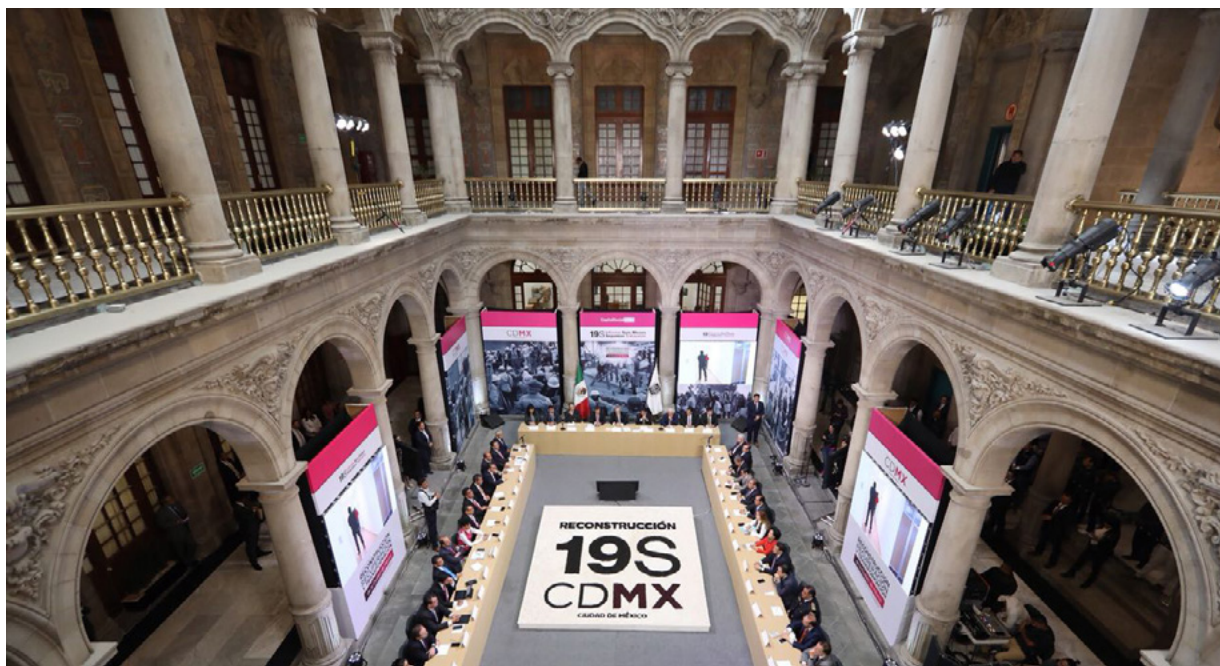
coordinado y de largo aliento tanto del Estado mexicano en su conjunto como de los particulares.

Propusimos entonces la integración de un Fondo Único que, bajo los principios de transparencia y eficiencia, permitiera hacer frente a la duplicidad de funciones, al uso clientelar de los programas sociales, a la corrupción y a la ausencia de coordinación entre los principales actores relevantes que participarían en los procesos de reconstrucción. Después de una intensa campaña y con el desdén de las

autoridades federales —pese a que cerca de 8 mil personas suscribieron nuestra solicitud al presidente de la República para integrar ese Fondo Único—logramos, sin embargo, que el Gobierno de la Ciudad de México anunciara la creación de un Fondo de Reconstrucción para la capital y que esa propuesta se plasmara en la Ley para la Reconstrucción de la CDMX, aprobada en diciembre 2017. Sobre esa base, el Coordinador Nacional del movimiento, Mauricio Merino, aceptó un asiento honorario en la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y accedió a colaborar, de la

mano de la organización, para exigir la más estricta transparencia en el diseño y en el uso de ese fondo para la capital de México. El Fondo para la Reconstrucción fue dotado con 5 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2018 (1,500 millones del FONADEN, aunque se etiquetaron 2,754 millones a dependencias y 1,018 provenientes del FAIS, sumando un total de 8,772 millones para tareas de reconstrucción).

Ese propósito de transparencia se vio amenazado y Nosotrxs no bajó la guardia. En enero de 2018, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso que fuera ésta la



que autorizara el destino final de los recursos para la reconstrucción, obviando el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción. La Asamblea envió oficios con las instrucciones de asignación a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, situación que denunció inmediatamente Nosotrxs, ya que no fundamentaban dicha asignación en el diagnóstico detallado que había realizado la Comisión para la Reconstrucción. Ante la imposibilidad de seguir cumpliendo con las funciones de transparencia al interior de la Comisión, Mauricio Merino, Katia D'Artigues y Ricardo Becerra decidieron renunciar y denunciar públicamente el hecho. A partir de ello, la presión del movimiento y de decenas de organizaciones que se sumaron logró cambiar el Decreto de Presupuesto que regresó las

facultades de asignación al ejecutivo local, con base en los planes de acción de la Comisión para la Reconstrucción.

Nosotrxs se mantuvo firme en la revisión recurrente de la transparencia en la asignación de recursos para la reconstrucción. Realizamos solicitudes de información constantes y obtuvimos los 47 oficios de autorización presupuestaria del ejercicio del 2018 para diversas unidades ejecutoras de gasto del gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones, relacionados con el proceso de reconstrucción. En dichas asignaciones se identificaron asignaciones discrecionales que se utilizaron para fines distintos a la reconstrucción, en medio del proceso electoral, las cuales Nosotrxs denunció en su platafor-

ma (<http://nosotrxs.org/?p=6977>). En ese momento instamos al gobierno capitalino a reemprender la ruta de una reconstrucción justa, transparente y eficaz, centrada en las personas, para darles certeza jurídica, y que recuperara y transformara la Ciudad de México como lo ordena la ley y lo garantizan nuestros derechos constitucionales.

Continuos llamados a reorientar la reconstrucción sin respuesta

A diez meses del sismo presentamos un nuevo análisis. En esa ocasión, investigamos el uso, priorización y acceso a los recursos públicos para la reconstrucción en la Ciudad de México, con el fin de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, y exigir que la información fuera pública, estuviera disponible en tiempo real y fuera accesible de manera sencilla. Identificamos una grave opacidad en el ejercicio de los recursos para la reconstrucción. Las asignaciones presupuestales no coincidían con el gasto comprobado en el ciclo fiscal 2017; y de los recursos destinados a la reconstrucción para 2018 al 4 de julio de 2018 sólo se había logrado comprobar el ejercicio de 4.7% del total de lo aprobado por la Comisión para la Reconstrucción (286.3 millones de 6,017.04). Solicitamos a las autoridades en ese momento la conclusión de los censos de afectaciones, un diagnóstico integral de necesidades y tener

claridad en las reglas para una justa priorización de los recursos y acceso a éstos. Sobre todo, exigimos la reasignación de los recursos disponibles a la tarea de reconstrucción de vivienda, que no fue una prioridad para el ejecutivo ni para el legislativo hasta muy tarde.

A 11 meses del sismo, la pregunta que retomó la atención de Nosotrxs fue qué pasaría si hoy vuelve a temblar, centrada en la necesidad de priorizar las acciones de reconstrucción. El censo exhaustivo de daños y damnificados aún no existe ni para la Ciudad ni para el país. Existen para la Ciudad un total de 636 inmuebles que colapsaron o están clasificados en “alto riesgo de colapso” o “alto riesgo”. Estos inmuebles, primero, deberían estar deshabitados y, segundo, deberían estar en proceso de demolición y reconstrucción, o reforzamiento, de acuerdo con las leyes de protección civil de la Ciudad de México. Nos dimos a la tarea de verificar el estado de riesgo y de demolición de dichos inmuebles, para discernir si las autoridades han llevado a cabo un correcto protocolo de mitigación del riesgo en la Ciudad, así como para conocer la situación de los damnificados en dichos inmuebles. En el momento que escribo estas líneas hemos avanzado con la mayoría de los inmuebles en Alto Riesgo de Colapso, la cual concluiremos y publicaremos a más tardar en la semana del 17 de septiembre.

Los primeros hallazgos son estremecedores: damnificados viviendo en inmuebles al borde del colapso; inmuebles en riesgo de colapso sin un proceso de demolición en camino ni un acordonamiento o medidas preventivas de protección civil que resguarden la vida de esas comunidades; y damnificados en la desatención, porque a un año no han logrado cubrir los requisitos para ser atendidos por las autoridades, ni accedido a los programas de apoyo que desconocen. Esta verificación se logró para la Ciudad de México a partir del trabajo incipiente de autoridades por conformar una base de datos de inmuebles dañados, hasta ahora incompleta y con múltiples errores. Sin embargo, no se logró identificar ninguna base similar para las otras ocho entidades afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre.

Volverá a temblar; hemos tenido recordatorios constantes este año. Tan sólo en la

Ciudad de México hay al menos 206 edificios con alto riesgo de colapso, muchos de ellos todavía sin demoler, que con un temblor de mediana intensidad, podrían caer. Los daños y damnificados podrían multiplicarse exponencialmente en comparación con los del año pasado. ¿Estamos preparados como sociedad para enfrentar un nuevo desastre de estas dimensiones? ¿Las autoridades tienen un plan detallado -y comunicado a la ciudadanía- para reaccionar ante lo inminente? Exigir estas respuestas a las autoridades es lo mínimo por hacer. La recuperación tardará muchos años. Nuestra esperanza es que las autoridades que hemos elegido tomen la responsabilidad y el liderazgo necesario en sus manos para establecer un nuevo rumbo del proceso de reconstrucción y recuperación. Dicen los enamorados que a veces es necesario que te muevan el piso para darte cuenta dónde estás parado.



Foto de Carlos Valenzuela vía Wiki Commons.

A UN AÑO DEL SISMO: EL DESASTRE CONTROLADO

Laura Georgina Freyermuth Joffre
CIUDADANÍA 19S

Las crónicas sobre la solidaridad, la movilización y el rescate en el 19s han quedado como una marca y un referente de lo posible. Al mismo tiempo, evocar la fecha no deja de ser agri dulce, al pensar en las personas a las que perdimos, al preguntarnos por qué hasta las plantas de luz y las cortadoras punta diamante tuvieron que ser conseguidas por la ciudadanía, al sentir el peso de la incertidumbre de las millonarias donaciones internacionales y sobre todo al mirar que, a un año, no solo hay muchas personas que no han podido regresar a casa, sino que tampoco estamos en una ciudad más segura.



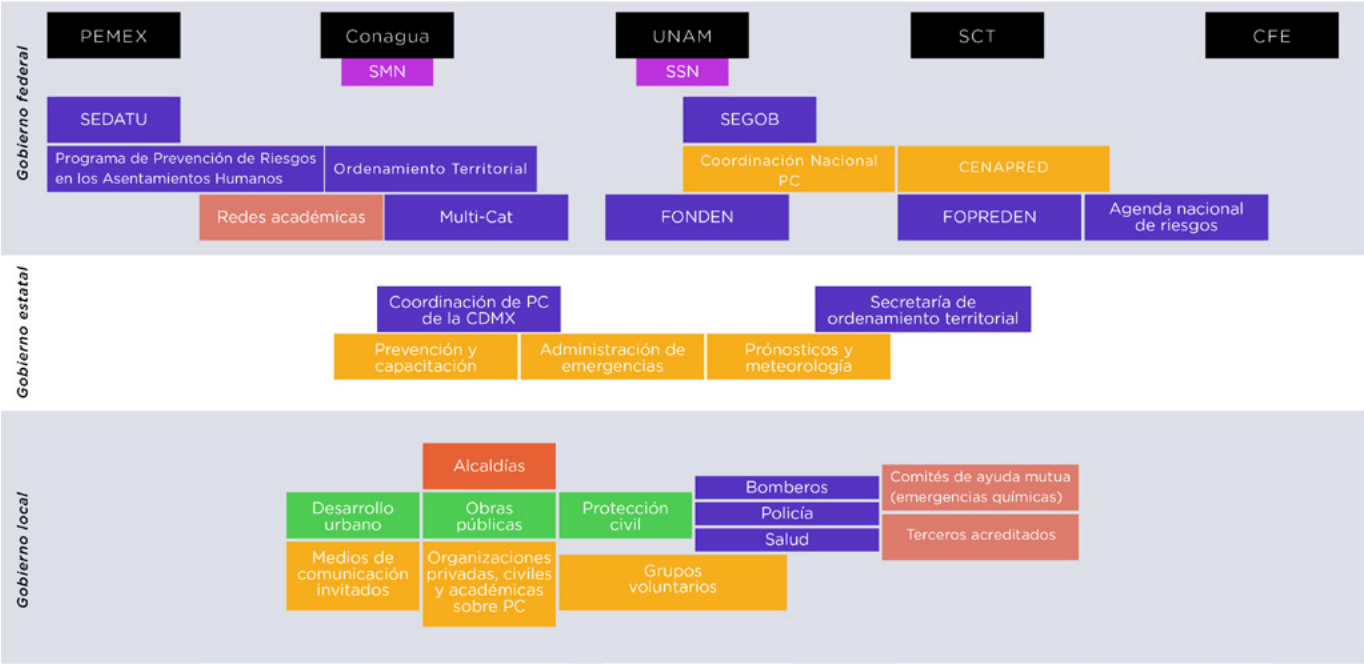
Imagen de los días posteriores al 19s. Foto: Gabriel Hernández Tinajero en Manual para la reconstrucción digna de Ciudadanía 19s.

El riesgo nuestro de cada día

Sin caer en apreciaciones que inciten al pánico o la nota que es fácilmente viralizable, es importante tener discusiones serias sobre el riesgo en la Ciudad de México. Si bien los sismos no pueden predecirse, sí es posible contar con políticas públicas y prácticas ciudadanas para afrontar este y otros riesgos. Por ejemplo, Atlas de Riesgos (cuadra por cuadra, público, accesible y constantemente actualizado) que deben existir a nivel nacional, de la ciudad e incluso de cada demarcación (invitamos en que se intenten buscar en línea para una amarga sorpresa);

la definición y ejercicio de los fondos para la prevención y atención de emergencias (con transparencia y rendición de cuentas); la declaración del inicio y término de los momentos de desastre o emergencia, que deben activar protocolos interinstitucionales de reacción y, al ser claros, permitirían también identificar las responsabilidades de las autoridades y las rutas de acción que podríamos conocer para solicitar atención o apoyo. ¿Cuántos de estos elementos vimos en la práctica antes del 19s, cuántas, con todo y las exigencias ciudadanas, hemos visto que se han implementado en los 12 meses posteriores?

ESQUEMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, CONSIDERANDO EL NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y LOCAL.



Fuente: Manual para la reconstrucción digna de Ciudadanía 19s

Ponemos a su consideración dos videografías para comentar un poco más al respecto:

- # *Atlas de Riesgo en*
<https://youtu.be/uoEiSxUoTwA>
- # *El Papel del Agua en el Subsuelo*
<https://youtu.be/UU4BZChMd2g>

Una mirada panorámica a la reconstrucción en la CDMX

Toda persona que transita o habita en esta ciudad ha sido testigo de la reconstrucción y es importante continuar el diálogo al respecto para identificar la forma en que nos ha afectado y qué debe cambiar para no perpetuar este largo lapso de confusiones, de desastre controlado. A continuación, compartimos algunos puntos a considerar para este debate:

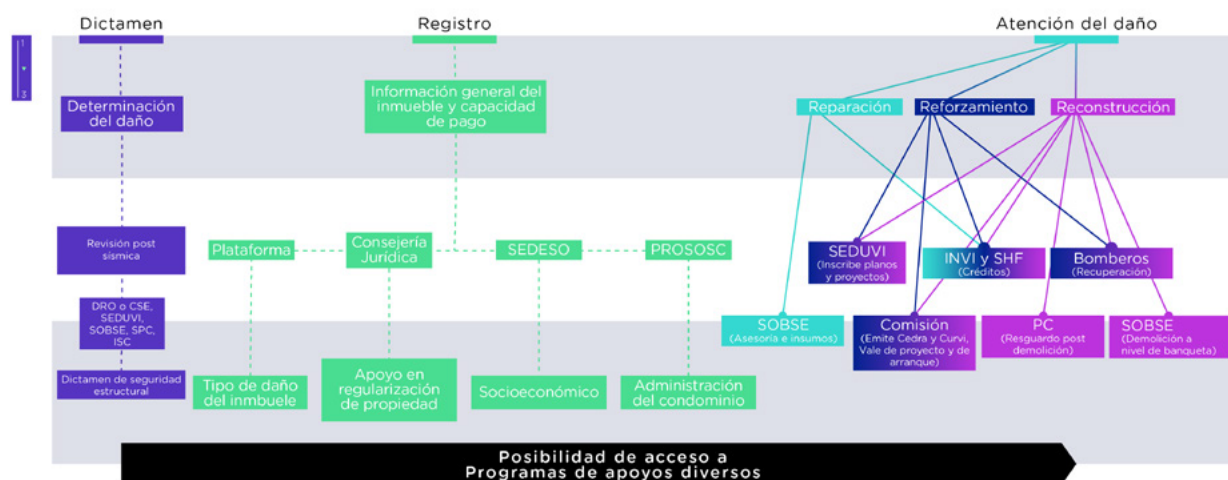
El ritmo y postura de la política pública: A unos días del 19s se emitieron la declaratoria de emergencia y de desastre; es en diciembre de 2017 cuando se decreta la Ley para la Reconstrucción y, en enero de 2018, el Programa para la Reconstrucción. A su vez se modifican varias normas técnicas de cons-

trucción. Es decir, se necesitaron 4 meses para contar con marco adicional (que se complementa con al menos 11 ordenamientos previos) que definen la postura del gobierno de la Ciudad de México para la reconstrucción: “La ley tuvo una definición crucial: si el apoyo gubernamental a los afectados por el terremoto del 19 de septiembre debía ser gratuito, igual y total a todos los afectados o si el apoyo debería distinguir, diferenciar y ubicar las distintas necesidades y capacidades de cada grupo de afectados. Los legisladores se decantaron por la segunda ruta, entre otras cosas porque, ni el país ni la Ciudad cuenta con recursos ilimitados” (Programa para la reconstrucción de la CDMX, 2018, p. 23).

Reconstrucción a gacetazos: Sin embargo, en estos meses se han publicado más de una decena de Lineamientos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en las cuales se han ido detallando los procedimientos, montos, requisitos y tiempos para acceder no solo a apoyos, sino incluso para contar con el reconocimiento como persona damnificada. La publicidad de este contenido ha sido mucho menor y no necesariamente ha considerado la accesibilidad a adultos mayores, quienes representan un número importante entre la población que aún padece afectaciones en su patrimonio pero sobre todo en sus derechos. Actualizaciones a estos lineamientos aparecen sin previo aviso; en lugar de existir una

ruta clara desde el inicio, cada paso se ha definido “en tiempo real”; esto ha condicionado el avance en el proceso de reconstrucción, pues no existe el camino para seguir todos los pasos. Ante este panorama, a lo largo de los meses, en CIUDADanía I9s nos dimos a la labor de su revisión para integrar el Manual para la reconstrucción digna, con la intención de sintetizar para un mejor análisis y exigencia. Puede consultarse y retroalimentarse aquí <http://ciudadania19s.org.mx/manual/>

ESQUEMA SOBRE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN, MOSTRANDO SU COMPLEJIDAD.



Fuente: Manual para la reconstrucción digna de Ciudadanía I9s.

Veracidad y cuidado en información: La Ley de diciembre definió la creación de la Comisión para la reconstrucción como la encargada de crear y seguir los objetivos e indicadores para esa tarea; sería además, responsable de la coordinación entre dependencias para una acción más ágil. La página web Plataforma CDMX sería el espacio para condensar la información de interés, así como el registro de las afectaciones y la rendición de cuentas. Sin embargo, a 9 me-

ses del I9s, Edgar Tungüí, comisionado para la Reconstrucción, comentó, en el evento “Diálogos I9s”, que no había objetivos ni indicadores y en julio anunció que se revisaría y crearía una nueva versión del Programa de reconstrucción; aunque aún no es público, el texto original ya no está disponible en línea (pero puedes encontrarlo en la sección “Normatividades reconstrucción” en www.ciudadania19s.org.mx donde hemos intentado compilarlas).

Por su parte, la Plataforma diseñada ha recibido numerosas críticas por la falta de precisión en los datos y por los constantes cambios de interfaz, que hacen más compleja su consulta. Además, estar registrado en ella es un requisito de acceso a apoyos gubernamentales, pero para ello se debe contar con un dictamen y este es un elemento que no se ha otorgado a todos los inmuebles, incluso a un año. En algunos lineamientos, se acepta ya el solo contar con la “inspección post sísmica”, que no es un dictamen en su totalidad y que, por ende, no evalúa de forma integral los daños, por lo que el registro actual no muestra un panorama real de daños y riesgos en la ciudad. La información no sólo es desarticulada, sino incompleta e incluso poco confiable.

Las distintas reconstrucciones: Si bien hemos detallado que la información oficial que se ha ido generando para guiar la reconstrucción es extensa (se estima que al menos 125 documentos han sido elaborados) hemos observado que la forma en que se implementa en cada zona de la ciudad es distinta. Por nombrarlo de forma breve, a reserva de ampliarlo en un par de meses en un nuevo reporte de CIUDADadanía 19s, observamos al menos la influencia de estos factores en ello: 1) Acceso diferenciado a la reconstrucción mediante gestores (para quien puede pagarlo) u organizaciones/actores clientelares (para quien no puede pagar los anteriores)

o en contra corriente por una organización vecinal con constantes retos y en el peor de los casos, nulo acceso o mayor riesgo al ser víctimas de estafadores que se hacen pasar por servidores públicos; 2) Estudios de subsuelo inexistentes, incompletos o realizados pero no públicos, por lo que no hay visión panorámica de lo que puede o no construirse o desarrollarse en cada zona; 3) Posibilidad de acreditación de la propiedad plena en muy pocos casos, parcial en varios (contratos de compra venta, pero no escrituras) o incierta en muchos (intestados, imposibilidad económica de hacer los trámites para tenerlo “en orden”) y la barrera que eso implica en el proceso; 4) Tipo de vivienda, hay más opciones para lo multifamiliar que lo unifamiliar, la cual es más constante en espacios que históricamente han sido excluidos de la ciudad como Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa.

El desastre controlado

¿La sensación de desastre y caos en la reconstrucción es una acción con objetivos claros para el control social? ¿Profundiza los pasos que ya había comenzado la gentrificación? Por lo pronto, los puntos anteriores nos permiten observar que ha sido una constante la ausencia de garantía al derecho a la vivienda de quienes habitamos esta ciudad: al no haberse repuesto para quien la

perdió, al generar un impacto en los precios de renta y venta de varias zonas, al limitar o violentar derechos básicos como el agua, la seguridad o hasta la salud en zonas afectadas y sobre todo, al no dar certeza sobre qué zonas no son seguras para habitar, pues la reubicación ni se nombra. Al menos, la educación y el trabajo también están afectados porque no todos los espacios donde estos se ejercen han sido dictaminados, porque no hay empleo que aguante el tiempo que consume el laberinto de trámites, porque el dolor aún se carga en cuerpo, mente y corazón, porque la incertidumbre y el acceso diferenciado ha golpeado el tejido en las zonas afectadas, generando un desgaste, que hace compleja la organización que podría significar un contrapeso a las violaciones de

derechos humanos que propiciaron y se han derivado del 19s.

Lo mínimo es esperar un posicionamiento y recomendaciones contundentes por parte de la Comisión local de derechos humanos. Miguel Ángel Mancera escribió: “La Reconstrucción que ofrece mi Gobierno, no es una adaptación oportunista del pasado, sino una anticipación fundada de nuestro porvenir, más igualitario, más incluyente y por supuesto menos vulnerable y más seguro. Los ciudadanos sabrán juzgarlo” (Programa para la reconstrucción de la CDMX, 2018, p. 7). Es, en efecto, momento de juzgarlo y, sobre todo, de encontrarnos como ciudadanía para que esta reconstrucción nos permita avanzar a una ciudad más digna, más segura, más justa.



TEXTOS CITADOS

Programa para la reconstrucción de la CDMX, 2018. Disponible en <http://ciudadania19s.org.mx/wp/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA-DE-RECONSTRUCCION.pdf>

Ruta Cívica. 2018. Manual para la reconstrucción digna. Disponible en <http://ciudadania19s.org.mx/manual/>

Foto de Adam Jones vía Wiki Commons.

LA OMISIÓN Y EL ENGAÑO: ÚNICA RESPUESTA PARA ATENDER LA TRAGEDIA EN OAXACA

Eugenia Mata
IDEMO AC

En mi colaboración en Brújula Ciudadana 93, de Octubre 2017, advertía que la dimensión de los desastres –producto de los pasados sismos- rebasó cualquier fuerza social organizada, los apoyos internacionales e incluso la acción de los gobiernos, lo cual no elude la dimensión diferenciada de la responsabilidad.

Las aportaciones provenientes de distintos gobiernos de otros países fueron públicas, así como los fondos de apoyo nacionales-privados, destinados al proceso de reconstrucción, particularmente para Oaxaca, uno de los estados priorizados, por la dimensión de los daños sufridos. No obstante, a un año de los acontecimientos, no parecen haber cambiado, de manera sustantiva, las condiciones de las y los oaxaqueños afectados por el sismo.



Foto de Teresa de Migue
Escribano.

Es necesario recordar que, aunado a la serie de sismos, otros desastres de la naturaleza –como los huracanes– agravaron la situación, no solo en las regiones siniestradas, sino que, en nuevas zonas (como la Costa), donde acontecieron nuevos sismos y continuaron los movimientos telúricos.

Otro elemento adicional, señalado en su momento, es que el levantamiento del censo fue muy deficiente, evidenciado por la multiplicidad de denuncias tanto de autoridades municipales como de personas damnificadas, de que las instancias correspondientes no llegaron a comunidades y zonas siniestradas, por lo que no se cuenta con datos precisos y reales tanto del número de personas, como del grado exacto del siniestro de las viviendas. Por tanto la prueba más contundente, es la que ofrece la observación directa.

Los elementos en contra que sigue sufriendo la población damnificada podrían resumirse en: otorgamiento de tarjetas sin fondo; constructoras que no cumplen lo prometido en la reconstrucción o incluso fraude de algunas de ellas; publicidad de las escasas obras que el gobierno llega a construir; y, en general, el mismo desamparo de la población, que cuando ocurrieron los sismos.

El problema mayor se aprecia en lugares como Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca, donde fueron minimizados los daños, cuando cifras proporcionadas por Protección Civil arrojan un total de 3,919 viviendas dañadas, ya sea con daño menor, parcial o total en nada menos que 34 agencias y rancherías municipales y 45 colonias, barrios y unidades habitacionales, lo que representa casi el 30% de la totalidad de las viviendas en el Municipio.

En el caso del Istmo, según la Coordinadora General de Damnificados del Istmo, no se ha llegado a reconstruir ni siquiera el 40% de las viviendas afectadas. Las acciones fraudulentas han sido la práctica constante, en donde incluso hubo una fundación denominada: Ibero Mexicana de Auxilio, que engañó a las personas solicitándoles que demolieran totalmente sus casas, porque así iban a recibir mayores recursos para la reconstrucción. Lo que queda ahora son solo escombros



y ningún lugar dónde vivir. Emblemático es el asunto de la entrega de tarjetas para la reconstrucción que no tienen fondos o que incluso, cuando alguna persona llegó por su tarjeta, que correspondía a 30 mil pesos, le entregaron una con valor de solo 15 mil. Las denuncias a la SEDATU, a la Fiscalía General del Estado se han presentado, sin que al día de hoy, las instancias gubernamentales actúen en consecuencia.

En el campo de la educación, el gobierno estatal reportó 324 escuelas con daños, de ellas 42 con colapso total. En la Región del Istmo de Tehuantepec, hubo un daño de

1,665 escuelas, manteniéndose hasta la fecha un promedio de avance de apenas un 20%; solo una reporta un avance del 70%. Ello significa que 100 mil niños/as en la Región, no tienen condiciones para volver a sus escuelas y tomar clases. En el caso de la Región Mixteca existen 116 escuelas afectadas por los movimientos telúricos. A decir del representante sindical de la Sección 22 en Huajuapán de León, hasta este momento, lo único que han recibido las escuelas afectadas son aulas móviles, lo que ha permitido que las clases se normalicen; pero aún se tienen los edificios afectados, poniendo en riesgo la vida de decenas de infantes. La explicación

que da la parte estatal gubernamental es que no han bajado los fondos del FONDEN, sin que haya una explicación lógica del retraso.

Lo paradójico es que en el Congreso Local, aun habiendo acordado la liberación de recursos, a ocho meses de aprobada la Cuenta Pública de Ingresos y Egresos, la Secretaría de Finanzas arguye desconocimiento, cuando tuvo el tiempo suficiente para hacer las adecuaciones presupuestales, siendo los desastres naturales, de los elementos de excepción para el balance presupuestario. A la par, reportó que nada más en el primer trimestre de este año, el gobierno sobrepasó el gasto en la cuenta de servicios personales, gastándose lo presupuestado y más en todo el año en este rubro, priorizando la atención a la población damnificada.

Parece que fue ayer

La continuidad de los movimientos telúricos, que ayudarían a no olvidar los ocasionados el año pasado y éste, así como la dimensión de la tragedia que fue para habitantes de 282 municipios en 2017, más 33 municipios en 2018, para los actores políticos —incluyendo los propios gobiernos—, se “olvidaron” de ellos y volcaron todas sus energías y recursos de todo tipo, al proceso electoral (Julio 2018). Si bien la amplia participación

ciudadana en dicho proceso, se incrementó de manera significativa hasta casi en un 70%, en el estado de Oaxaca, ello no ameritaba aislarse de la realidad y desatender las necesidades más básicas de sobrevivencia que tienen las personas damnificadas.

El Ayuntamiento de Pinotepa Nacional, por poner un ejemplo, “desapareció” aproximadamente 10 millones de pesos que fueron aprobados en el Consejo de Desarrollo Social Municipal para la Reconstrucción. A la par, se hizo caso omiso sobre la destrucción que sufrieron los fogones y hornos que utilizan las mujeres, no sólo para la preparación de alimentos, sino para quienes se dedican a la venta de alimentos, quitándoles un importante medio de trabajo que abona a la economía familiar.

El pasado 15 de Agosto, el gobernador Alejandro Murat, acudió a Juchitán con la intención de inaugurar el Hospital Civil, lo que no fue posible, debido a que no había sido terminado. No fue posible tampoco conocer la información sobre la reunión sostenida entre las autoridades municipales y el gobernador sobre la reconstrucción, en términos de montos, modalidades, periodo, etcétera.

En diversa medida y propósito, lo cierto es que los partidos políticos, los candidatos y candidatas, igual que los servidores públicos que se avocaron a apoyar a las y los contendientes en el proceso electoral, no tomaron en cuenta las demandas y exigencias de la población en torno a la serie de irregularidades e inacciones relacionadas con la reconstrucción de viviendas, el robo de recursos económicos en las tarjetas, el incumplimiento fraudulento de las constructoras; ni la habilitación expedita de servicios públicos ligados a la salud, la educación y la movilidad, por mencionar

algunos de los múltiples derechos humanos, que fueron por la vía de los hechos, conculcados a la población.

Al final solo queda la solidaridad entre damnificados y sociedad

La respuesta de grupos de la sociedad organizada y la propia solidaridad entre pares, es decir entre la propia población damnificada, ha sido la manera en cómo los habitantes de las regiones siniestradas han buscado estrategias y salidas para resolver su situación, con todo lo que de esfuerzo significa, en todos los sentidos.

Como lo manifiesta una de las dirigentes de Alianza Cívica Pinotepa Nacional, AC: La frustración y tristeza ante el abandono del gobierno, se ha manifestado en el resultado de la elección pasada. Mientras, la población damnificada, espera poder ejercer su derecho a una vida digna.



DEL TERREMOTO NATURAL AL TERREMOTO INSTITUCIONAL

Nataniel Hernández Núñez

DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

TONALÁ, CHIAPAS

A casi un año del sismo del 07 de Septiembre con epicentro en el municipio de Pijijiapan en el Estado de Chiapas, muchas familias aún siguen en espera de la distribución del 30% de los fondos que BANSEFI debe entregar y que fueron asignados mediante el FONDEN. El proceso de reconstrucción, pues, está detenido y las familias siguen viviendo en condiciones adversas.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno no consideraron durante este proceso

de reconstrucción dar la debida atención a las afectaciones psicosociales, económicas, emocionales, de salud y educación. Debido a la magnitud de los daños muchas personas presentaron crisis, pánico, miedo, sus fuentes de ingreso fueron afectadas directamente y los servicios básicos siguen sin ser restablecidos en su totalidad.

Es notoria la inoperancia e ineficacia de las autoridades encargadas de prevenir posibles desastres naturales no solo por la nula



actuación, sino también por la inexistencia de planes y programas de resiliencia, y de evacuación, que podrían garantizar la debida atención en casos de emergencia. A ello debe añadirse la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

Los víveres recolectados en centros de acopio por las autoridades se distribuyeron de forma selectiva, y con fines político-electorales, de igual forma la elaboración de los censos de damnificados por la SEDATU fue discriminatoria, dejando fuera a más de 8,000 familias que no han sido beneficiadas por fondos para que se garantice el derecho a una vivienda digna; la verificación técnica para cuantificar los daños fue realizada por personas sin experiencia en materia de construcción y es notoria la falta de acompañamiento técnico.

La reconstrucción de los centros educativos, casas de salud y hospitales ha sido lenta, con lo cual se ha dejado en estado de vulnerabilidad a miles de familias y se les ha negado la posibilidad de mejorar los servicios públicos, la atención y calidad.

Los retos que aún persisten en los municipios de la entidad consisten en garantizar que los cerca de 8,000 mil familias reconstruyan su patrimonio, por lo que debería revisarse de forma minuciosa los censos actuales para

procurar la asignación de fondos públicos y estos sean entregados directamente a las personas damnificadas.

La implementación de medidas de prevención, evacuación y resiliencia en casos de desastres naturales con perspectiva en derechos humanos, para garantizar el respeto a la dignidad humana, a la vida, la salud, educación y la vivienda.

Consideramos importante que a nivel de los Ayuntamientos Municipales se asignen recursos económicos para atender cualquier contingencia, que permita responder y atender las necesidades de alimentación, de salud, atención psicológica, el tiempo que sea necesario, hasta que se restablezcan los servicios públicos, y la vida cotidiana de las personas.

En lo que respecta a la edificación de viviendas, es importante considerar y respetar el modelo constructivo de cada región en Chiapas, ya que se ha impuesto un modelo inapropiado e inadecuado a las condiciones geográficas, climáticas y económicas.



Por otro lado deben mencionarse los esfuerzos de la sociedad civil y las diversas muestras de solidaridad, que han permitido garantizar la alimentación, la atención médica, psicosocial, y en algunos casos reconstruir la vivienda, el tejido social, y la participación de las mujeres, y hombres para la toma de decisiones.

Es importante que las autoridades electas en Chiapas y a nivel Federal diseñen una ruta de atención integral a favor de las personas afectadas, que permita resarcir los efectos del fenómeno natural en lo psicosocial, emo-

cional, económico, sanitario, educativo, que garantice y proteja los derechos humanos, y genere una participación directa en el diseño del modelo constructivo.

Existe un nuevo problema relativo a la inexistencia de regulaciones para la actuación de agencias hasta ahora no existe forma de regular la actuación de agencias de casa de créditos o financieras, así como también de los excesos en los costos de materiales de construcción en las tiendas o ferreterías, en donde no se ha impuesto sanción alguna porque directamente agravan la condición económica y patrimonial de las personas damnificadas.

LA RECONSTRUCCIÓN CORRESPONSABLE EN LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS

Carlos del Ángel Estrada Marcos

FONDO DE CONSERVACIÓN EL TRIUNFO A.C*

Estamos completamente seguros de que los mexicanos hemos reflexionado mucho a raíz de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre.

Cada día estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos, México es un país con una geografía muy diversa y a pesar de tener regiones altamente sísmicas la ocurrencia de ellos a gran magnitud es poco frecuente, pero cuando suceden ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.

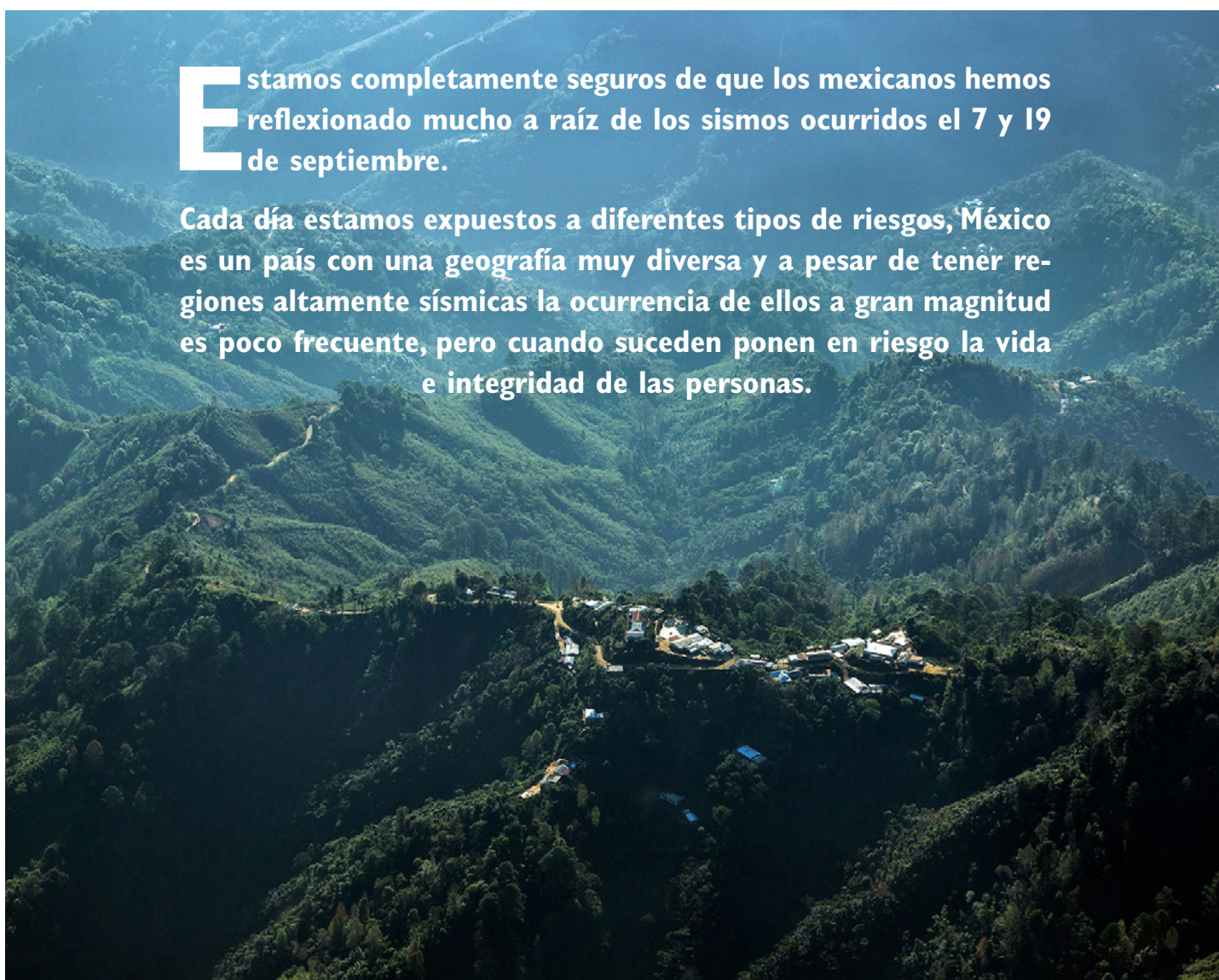


Foto de Archivo FONCET.

Foto de Jorge Silva.



Hace un año, el 7 de septiembre de 2017, se presentó un movimiento telúrico con una magnitud de 8,2 grados, afectando principalmente a los estados de Chiapas y Oaxaca. Pasando las 24 horas el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) informó que era el evento sísmico de mayor magnitud que se haya registrado en el país en los últimos cien años. De manera inmediata comenzó el procedimiento para identificar a los posibles damnificados, sin embargo el ejercicio solo se centró en las cabeceras

municipales o aquellas regiones donde las vías de comunicación “permitían el acceso”.

Ante este panorama hubo comunidades que no fueron tomadas en cuenta como aquellas localizadas en puntos remotos de la Sierra Madre de Chiapas quedando prácticamente en el olvido y fuera del mapa oficial de la reconstrucción. Ni el estado ni la Federación dieron cuenta de las decenas de casas dañadas o derrumbadas que dejó en esta zona el sismo del 7 de septiembre.

La atención en las comunidades más remotas

Durante la segunda semana de septiembre, el FONCET, cuyo trabajo se enfoca en la Sierra Madre de Chiapas, se movilizó para ayudar a las familias más afectadas. La estrategia de emergencia incluyó la ayuda humanitaria, la distribución de víveres, la dotación de lonas para uso como vivienda temporal y, eventualmente, la reconstrucción total o parcial de algunas viviendas.

Para comenzar la primera etapa el FONCET lanzó una convocatoria a la sociedad civil chiapaneca con el objetivo de recolectar víveres, un llamado que tuvo una increíble respuesta; era evidente que el evento había incentivado el deseo de ayudar a los más

Foto de Jorge Silva.



necesitados. Seguidamente, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se realizó un ejercicio de mapeo para identificar a las comunidades de difícil acceso y que recibieron poco o nulo apoyo por parte del gobierno, con lo cual se identificaron 38 comunidades y comenzó el proceso de ayuda humanitaria.

La segunda etapa “Vivienda temporal” tenía como objetivo apoyar a las familias que habían perdido todo. Como ejercicio se identificó aquellas viviendas que en un mediano o largo plazo recibirían apoyo de reconstrucción total o parcial. Las primeras dos etapas se completaron satisfactoriamente y

para la reconstrucción hacían falta recursos. A finales de año se recibió una increíble noticia, USA Poultry & Egg Export Council (USAPEEC) y Project Paz nos anunciaron dos importantes donativos que haría posible la siguiente etapa.

Así, comenzó la tercera etapa, la de “Reconstrucción”, en enero de 2018 y se centró principalmente en 3 comunidades; Monte Virgen y Vista Alegre ubicadas en el municipio de Montecristo de Guerrero, y la comunidad de Los Laureles en el municipio de Villaflores, que quedaron prácticamente en el olvido y se necesitaba hacer un trabajo integral para reconstruir el tejido social.

Foto: Silvia Arlene Herrera Gómez.



Las condiciones de los caminos de acceso a las comunidades representaron uno de los retos más fuertes en el desarrollo del proyecto, sobre todo en el acarreo de materiales, puesto que los camiones que transportaban los materiales tuvieron muchas dificultades; algunos tuvieron fallas mecánicas en su intento por acercarse lo más posible a las comunidades, sin embargo la participación de la comunidad fue clave, trabajando en equipo, la mayoría se sumó a la ayuda aún sin ser beneficiarios directos del proyectos

El 28 y 29 de mayo de 2018 se realizó la tan esperada entrega de viviendas en comunida-

des afectadas por el sismo; el proyecto logró beneficiar a 296 personas. Las casas entregadas son de 37 m² y tienen dos habitaciones y una cocina. Todas están terminadas y con instalación eléctrica. El proyecto promovido por el FONCET fue posible mediante el trabajo corresponsable, de doble vía. Costeamos el material de reconstrucción (láminas, tinacos, pintura y herrería), mientras los beneficiarios aportaron la mano de obra.

Todo el esfuerzo del proyecto “Reconstruyamos México en el corazón de la Sierra Madre de Chiapas”, coordinado por el FONCET fue posible con el apoyo de USA Poultry & Egg

Foto de Archivo FONCET.



Export Council (USAPEEC), Proyect Paz, Ecosistemas S.C y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; especial participación tuvieron los guardaparques, por su noble labor y compromiso en pro de la conservación de los recursos naturales; también fueron ellos los primeros en llevar la ayuda humanitaria a las poblaciones más alejadas. La emergencia no ha pasado y la gente está siendo olvidada.

***El Fondo de Conservación El Triunfo A.C (FONCET)** es una asociación civil sin fines lucro con el objetivo de conservar una de las regiones de mayor importancia biológica a nivel Nacional, La Reserva de la Biosfera El Triunfo, cuyos bosques prestan servicios ambientales estratégicos al estado. Un trabajo coordinado con un enfoque de desarrollo comunitario. El FONCET procura y administra recursos

de fuentes estatales, nacionales e internacionales, donde a partir de socios y/o aliados estratégicos implementan las acciones en campo.

- Página web: www.fondoeltriunfo.org
- FB: Fondo de Conservación El Triunfo AC.
- INST: Foncet_a.c

MULTIFAMILIAR TLALPAN: RECONSTRUCCIÓN SIN REDENSIFICACIÓN Y SIN DEUDA

Silvia Angélica Reza Cisneros

DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSULTORIO DE ARQUITECTURA PRÁCTICA

Antes del 19 de septiembre de 2017 en el Multifamiliar Tlalpan habitaban más de 500 familias. El terremoto provocó el derrumbe de uno de los diez edificios del complejo y dejó gravemente dañado al resto, hasta el día de hoy ninguna familia ha podido regresar a su hogar de manera segura.

El Consultorio de Arquitectura Práctica (CAP) respondió a la emergencia con la implementación de un programa de vivienda emergente en los campamentos que conformaron las familias que se quedaron sin patrimonio y que no tuvieron a dónde ir, y ha brindado acompañamiento en el diagnóstico de los edificios dañados.



Unos días después de haber concluido el rescate en el Multifamiliar Tlalpan, los vecinos se empezaron a organizar a través de Asamblea. Muchas preocupaciones y posturas técnicas, ideológicas y políticas se expresaron, pero una tuvo consenso sin duda:

El Multifamiliar necesita ser reconstruido sin que los vecinos se endeuden y sin redensificación, es decir, sin construir más pisos y/o comercios para venderlos.

En el Consultorio de Arquitectura Práctica coincidimos y apoyamos la demanda, no imaginamos que la Ley de Reconstrucción se aprobaría exactamente en el sentido contrario: la reconstrucción sería a partir de la redensificación y los créditos. En ese momento inició un arduo proceso de lucha para revertir los efectos de una Ley que se encontraba fuera de la realidad de ese predio y de mucho otros que conformaron Damnificados Unidos.

El pasado 27 de agosto, en la conferencia “Directrices para la reconstrucción con enfoque de Derechos Humanos”, la Arq. Raquel Rolnik, exrelatora especial de la ONU sobre la vivienda adecuada, expuso que uno de los problemas en los procesos de reconstrucción observados en otros países es justamente tener un solo modelo y programa de reconstrucción, porque los casos siempre son distintos y eso fue lo que pasó en la Ciudad de México. Resulta imposible atender de manera similar los problemas ocasionados por el sismo en Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán y la Roma, por ejemplo, pues cada caso amerita una atención y solución distinta, que siempre debería ser en torno a un derecho fundamental, el derecho a la vivienda digna y adecuada.



En general, la redensificación implica un problema más que una solución si no va acompañada de una política urbana integral. Actualmente la ciudad carece de los servicios públicos necesarios como agua, drenaje, servicio de basura, espacios públicos, transporte, etcétera, para seguir soportando la redensificación que ha enfrentado desde antes del sismo y que empeoraría significativamente al redensificar los predios afectados por el más reciente terremoto.

La Organización de las Naciones Unidas recomienda a los países que las ciudades deben tener por lo menos 16 metros cuadrados de áreas verdes por persona. La Organización Mundial de la Salud, por su lado, recomienda de 11 a 9 metros mínimo: si dividimos los 12,172 metros cuadrados de espacio libre aproximado de la Unidad Habitacional entre 2,000 habitantes, en el Multifamiliar Tlalpan hay en promedio 6.08 metros cuadrados de área libre por habitante, muy por debajo de los metros recomendados, por lo que, meter a los vecinos en un esquema de redensificación disminuye automáticamente la calidad de vida de sus habitantes, eso sin considerar, la falta de planeación urbana en la zona que permita soportar tal esquema.

En cuanto al endeudamiento de los vecinos para la reconstrucción, debería bastar



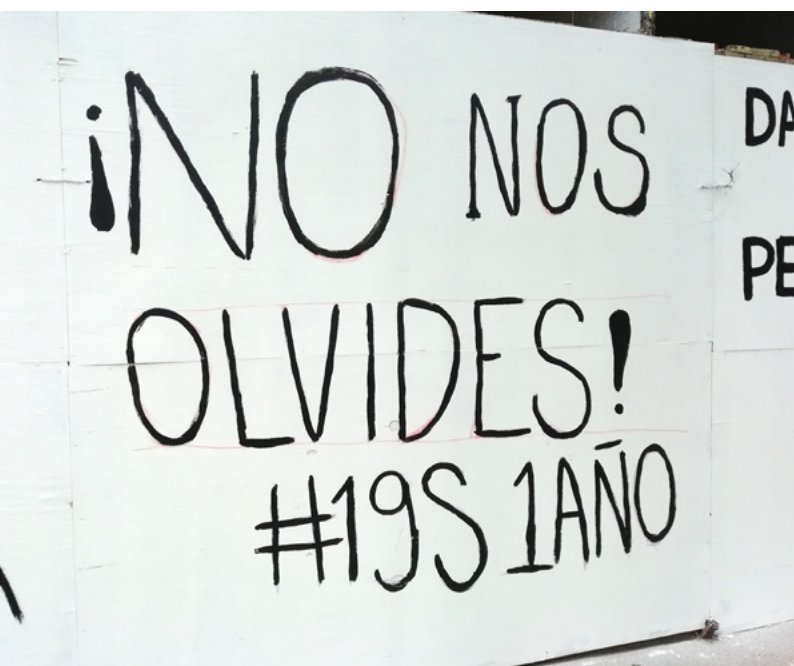
con recordar que la Constitución en su artículo 4 y diversos instrumentos internacionales establecen que las personas deben contar con una vivienda adecuada y que los Estados Nación deben proveer los medios para garantizar este derecho. En este sentido, el caso del Multifamiliar Tlalpan resulta emblemático porque justamente su construcción es resultado de una política pública en la que el Estado mexicano asumió su papel de garante del acceso a la vivienda y, en 1957, construyó este complejo por medio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) para dotar de vivienda a los trabajadores del Estado; en su momento, las familias que adquirieron los departamentos pagaron sus viviendas.

Aunado a lo anterior, la vulnerabilidad económica de muchas de las familias que habitan el Multifamiliar hace imposible la adquisición de un crédito, sobre todo cuando el único soporte económico con el que contaban para confrontar su realidad económica era la seguridad de tener una vivienda sin tener que pagar por ella. Por la naturaleza de la construcción a cargo del ISSTE, muchos adultos mayores pensionados habitan la unidad y sobra decir que en México las pensiones son insuficientes para adquirir compromisos de deuda.

Lo sucedido en la Ciudad de México con el sismo del 19 de septiembre obliga al Estado mexicano a repensar su política de prevención de desastres. Si contáramos con una estrategia efectiva para detectar los edificios y viviendas que por su edad, su sistema constructivo, su ubicación, y otros factores, no

son capaces de soportar sismos de las magnitudes que se vivieron en 2017, se podrían atender de forma gradual y se evitarían pérdidas humanas y los gastos estratosféricos que implica una reconstrucción para el Estado.

Ha sido mucho trabajo y organización la que han asumido los vecinos del Multifamiliar para transformar la Ley de reconstrucción en una que se apegue a su realidad; ha sido mucho trabajo el que se ha requerido para contar con campamentos menos agresivos para sus habitantes; los han apoyado muchas organizaciones para su mejoramiento como TECHO, la UNAM, la UAM, Green Peace, Sindicato Canadiense UNIFOR, entre otras. Pero sin duda, el apoyo más importante que pueden recibir los vecinos en la lucha por la nueva construcción social de su hábitat digno, es la empatía y el apoyo a su demanda.



JOJUTLA: LA TAREA SIGUE SIENDO TITÁNICA

Bosque David Iglesias Guzmán y Óliver Díaz Morales

MOVIMIENTO #RESURGE

A un año del sismo del 19 de septiembre la sensación es que aún falta mucho para poder afirmar que Jojutla está de pie. Decir que no hay avances en materia de reconstrucción sería una mentira, pero pretender que las familias que ya habitan sus nuevas casas o que las escuelas que ya disfrutan de sus nuevas instalaciones son representativas de la generalidad de los casos, sería igualmente falso e irresponsable.



Asumimos, entonces, que la generalidad en el balance de las acciones de reconstrucción en este año es lo casuístico. Una razón por la que resulta difícil establecer patrones de análisis sobre la reconstrucción es, de entrada, la falta de información fiable. Las capacidades de las autoridades locales estuvieron claramente rebasadas por la magnitud del sismo, y el estado de asombro y de incertidumbre condujo a una ausencia de coordinación en las tareas urgentes de atención a la emergencia durante las primeras semanas...

...pero este estado se prolongó durante los meses siguientes, y por increíble que parezca, no se levantó ningún censo preciso de las afectaciones, por lo que la toma de decisiones y ejecución de acciones de reconstrucción ha sido en ausencia de información.

Otro aspecto, que bien vale resaltar y que podría abonar a entender la falta de coordinación en las acciones de los distintos órdenes de autoridad, es que el proceso electoral local 2017-2018 ocurrió durante los 10 meses inmediatamente posteriores al sismo y, triste e indignantemente, muchas autoridades

prestaban mayor atención a las decisiones y acomodos electorales que a las necesidades derivadas del desastre. Hubo momentos en que, debido a la coyuntura de alianza electoral entre los partidos del gobernador y el alcalde, las cosas parecían fluir rápido y la obra pública para la reconstrucción en Jojutla era prioritaria, pero cuando el alcalde finalmente decidió contender para diputado local por un partido opuesto al del gobernador, la relación dejó de ser tersa y las gestiones para atender la emergencia en el municipio se complicaron.

El modelo de autoconstrucción, receta cómoda y desastrosa

La apuesta del Gobierno Federal para atender a las familias damnificadas mediante la entrega de tarjetas con diferentes montos de acuerdo al impacto del sismo en sus hogares prometía ser una estrategia rápida y eficiente. En Jojutla no fue el caso. Debido a la falta de coordinación y desorden en los levantamientos de censos de daños, los listados preliminares de familias que recibirían los montos de apoyo del FONDEN no coincidieron al cien por ciento con los efectivamente entregados.

Esto significó que familias cuyas pérdidas habían sido calificadas como daño total, re-



cibieron únicamente el apoyo correspondiente a daño parcial. También significó que familias que aparecían dentro de los listados de beneficiarios del FONDEN finalmente no recibieron apoyo alguno.

Las autoridades locales (estatales y municipales) intentaron intervenir para aclarar los estatus de las familias que reclamaban no haber recibido lo ofrecido, pero las gestiones fueron insuficientes y en muchos casos las familias quedaron finalmente desprotegidas.

Además, los recursos para quienes efectivamente obtuvieron el apoyo del FONDEN

se iban a entregar en tres ministraciones distintas. La primera de estas llegó a tiempo, pero la segunda, que correspondía pagar al gobierno del Estado se retrasó, provocando protestas y desencuentros entre los gobiernos estatal y federal. Sin un flujo ordenado de efectivo, las familias que ya se encontraban en obra, se veían en dificultades para sostener sus trabajos de reconstrucción.

Debido a la apuesta por el modelo de autoconstrucción, y dadas las complicaciones operativas en la entrega de recursos, la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas ha sido muy desigual. En una misma

cuadra conviven hoy día familias que aún habitan en carpas y refugios provisionales con otras que ya disfrutaban de viviendas reconstruidas. En la colonia Emiliano Zapata, se pueden apreciar claros ejemplos de este fenómeno. Los contrastes pueden ser desgarradores, y son una muestra de como la ausencia de autoridad coordinadora y la apuesta por la autoconstrucción (que cada quién haga como pueda con lo que tenga) generan y profundizan desigualdades.

Además, quienes reconstruyen en los terrenos donde perdieron sus casas anteriores lo hacen con fe ciega, sin información ni criterios o lineamientos de riesgo, con muy poca orientación o asistencia técnica oficial...

Quienes han corrido con más suerte, y ya sea que contaban con recursos propios y/o lograron recibir los programas de apoyo, pudieron demoler, limpiar y comenzar a reconstruir desde diciembre y enero. Quienes han tenido que esperar a recibir los apoyos gubernamentales, privados o han tenido que buscar créditos y préstamos han comenzado a reconstruir de manera rezagada.

...de nuevo se hace presente el caso por caso: existen profesionales y asociaciones que, motu proprio, han brindado acompañamiento y asesoría técnica a las familias que están reconstruyendo, pero estas distintas orientaciones constructivas no comparten criterios, ni se están dando conforme a lineamientos comunes, por lo que pudieran surgir nuevas complicaciones debido al des-





Fotos de Carlos Brito y Óliver Díaz

orden urbanístico con el que se va dando los avances en la reconstrucción de viviendas particulares.

Existen casos de familias que se endeudaron para adelantar sus obras de reconstrucción confiando en que recibirían de manera íntegra y oportuna los montos del FONDEN, pero que tuvieron que cancelar sus proyectos a mitad de proceso debido a la falta de liquidez porque los recursos llegaron incompletos o no llegaron, y ahora habitan en casas a medio reconstruir y tienen, además, que enfrentar las deudas con proveedores y constructores.

Existen también casos de fraude, protagonizados por supuestos constructores que

ofrecieron sus servicios mediante un sistema de pago por cuotas, y tras cobrar la primera cuota a varias familias, desaparecieron o se desentendieron de lo acordado.

Hay todavía familias que no tienen certeza de poder comenzar a reconstruir y viven en casas rentadas, compartiendo con familiares, o en refugios provisionales. Las familias que se han visto doblemente afectadas por la pérdida de su patrimonio, en primera instancia, y por la ineficacia e ineficiencia de los apoyos gubernamentales, siguen sin obtener una respuesta o acompañamiento claro de parte de la autoridad. Paralelamente, la coyuntura de transición escalonada en los distintos órdenes de gobierno no ha sido de ayuda, pues las autoridades salientes manifiestan más bien

desentendimiento, heredando la resolución de conflictos a quienes les sucederán.

El caso de la infraestructura pública, desigualdad en la atención

En el ámbito de la infraestructura pública nos gustaría resaltar los contrastes entre distintos casos de reconstrucción de escuelas afectadas. El caso de la infraestructura educativa del municipio fue especialmente grave: más de 50 centros educativos de niveles básico, medio superior y superior, públicos y particulares sufrieron afectaciones estructurales por el sismo; 20 sufrieron daños tales que fue necesario acondicionar espacios provisionales para reubicar sus actividades, un gran número de estos casos no ha recuperado sus instalaciones al comienzo del nuevo ciclo escolar.

Tal como en el caso de la vivienda particular, la atención a las escuelas ha sido diferenciada; existen tanto casos en los que fundaciones privadas “adoptaron” a las comunidades educativas y las autoridades facilitaron los trámites para que con los recursos particulares iniciaran prontamente los trabajos de demolición y reconstrucción; en otros casos, la autoridad educativa (el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, en conjunto con el Instituto Federal de Infraes-

tructura Física Educativa, INIFED) fue poco colaborativa con las comunidades escolares para que estas avanzaran en las tareas re-constructivas. Han sido las comunidades más organizadas y dispuestas a protestar y exigir a las autoridades, las que han tenido mayor avance en sus casos particulares. En más de uno de estos casos la autoridad educativa llegó a amenazar con represalias a directivos y personal docente de las escuelas en caso de no contenerse las exigencias de madres y padres de familia.

Una noticia reciente ejemplifica a la perfección la vigencia de estos contrastes: el 7 de septiembre del presente año, se hizo la entrega de la escuela primaria Cuauhtémoc, en el centro de Jojutla, completamente reconstruida. Dicha reconstrucción corrió a cargo de la fundación Bancomer, que al igual que otras fundaciones nacionales e interna-



cionales han intervenido en la rehabilitación de centros escolares que ya han podido, o están próximos a reactivar sus actividades normales. Ese mismo día, madres y padres de familia de la escuela primaria Juan Jacobo Rousseau, también ubicada en el centro de la cabecera municipal, se manifestaron bloqueando un crucero importante en reclamo por que sus hijas e hijos aún están tomando clases en una sede provisional, el auditorio de la comunidad conurbada de Panchimalco.

Las y los estudiantes de la Juan Jacobo no han corrido con la misma suerte que los de la Cuauhtémoc, o la Narciso Mendoza, de Jicarero, apadrinadas por fundaciones y, al igual que las y los alumnos de otras primarias como la Venustiano Carranza, o la Emiliano Zapata de Tequesquitengo, toman sus clases dentro de carpas donadas por la UNICEF en espera de que el gobierno termine las obras de rehabilitación que les permitan volver a sus instalaciones

Un hecho que provoca rabia y desesperación, particularmente a las madres y padres de la Juan Jacobo, es que la obra que continúan esperando, un año después, es únicamente la rehabilitación de la barda perimetral de la primaria. No se explican cómo puede ser que otros centros que tuvieron que ser demolidos en su totalidad ya estén funcionando al cien por ciento, mientras que su escuela aún tiene que operar en una sede provisional.

Nada justifica que la atención a las personas damnificadas por el sismo haya sido desplazada del centro prioritario que tenía que ocupar para las autoridades en los meses pasados, pero dados ya los resultados electorales, es de suma importancia que las administraciones en transición sienten bases fuertes para que las autoridades nuevas puedan dar un seguimiento adecuado y establecer una ruta clara rumbo al restablecimiento pleno del ejercicio de derechos que se ha visto interrumpido por las afectaciones del sismo y la falta de eficiencia en la reconstrucción.

Creemos que es en la construcción y monitoreo de una agenda de reconstrucción clara y sólida, que parta de información veraz y coloque en su justo centro las necesidades de las familias y comunidades damnificadas, en donde vale más la pena enfocar los esfuerzos de acompañamiento desde la sociedad civil, pues la tarea aún es titánica y se sigue requiriendo de todo el apoyo posible.



UNIÓN HIDALGO: MUJERES QUE ‘ALIMENTAN’ LA RECONSTRUCCIÓN

Paloma Villanueva*

Los días que Rosalva es responsable de la cocina, le toca coordinar a sus compañeras y encargarse de que el atún con chipotle, el arroz blanco, la ensalada y el agua de horchata; estén listos cuando lleguen quienes trabajan en la reconstrucción de las casas en Unión Hidalgo, Oaxaca.

Los guisos se sirven en el comedor comunitario que 18 mujeres zapotecas montaron tras el sismo del 7 de septiembre.



“En cuanto pasó el terremoto, salimos a hacer recorridos y lo primero que vimos fueron las casas devastadas, encontramos muchas amistades que sólo se dedicaban a llorar y no encontraban cómo solucionar y cómo superar las grandes pérdidas que estábamos teniendo, se preguntaban ¿dónde vamos a guardar nuestras cosas?, ¿dónde se van a quedar los niños?”, recuerda.

Pero la pregunta que Rosalva se hizo fue otra: ¿qué iba a comer la gente? Las personas en Unión Hidalgo obtienen recursos del comercio local, se dedican al bordado, la elaboración de canastas, la producción de pan y tortillas; y venden sus productos en la misma comunidad. Pero el sismo dejó sin casa a muchas personas, dañó los lugares

de trabajo y obligó a destinar todo el dinero disponible a la reconstrucción.

Así que Rosalva convocó a sus compañeras del colectivo Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida, su amiga Lupita puso a disposición su terreno y distintas organizaciones de la sociedad civil les donaron una carpa, mesas y sillas de plástico, utensilios de cocina y trastes.

De la ayuda humanitaria que llegó a Unión Hidalgo proveniente de distintos puntos del país, recopilaron y almacenaron latas de atún y verduras, frijol, arroz, aceite, sopa de pasta, agua embotellada; víveres que después transformaron en energía y fuerza para las personas de la comunidad que necesitaban levantar escombros, enterrar a sus muertos y reconstruir sus casas.

“Al principio venían entre 100 y 200 personas en cada comida. Nos organizamos en equipos de cinco personas coordinados por una compañera distinta cada día. Empezábamos a las 6:30 de la mañana y terminábamos como a las 8 o 9 de la noche y no cobrábamos la comida, porque se trataba de apoyar la comunidad”, explica Rosalva.

A seis meses del sismo, la red de apoyo que tejieron estas mujeres zapotecas aún mantiene en pie el comedor que provee





alimentos gratuitos a los trabajadores que están reconstruyendo las casas. Para los voluntarios y voluntarias de las organizaciones que implementan proyectos en la zona y el resto de las personas de la comunidad, el costo de la comida completa es de 20 pesos.

Rosalva y sus compañeras crearon un espacio de apoyo para las personas afectadas por el sismo, pero hoy ese comedor representa mucho más. Es un ingreso que permite a cada mujer que trabaja ahí, ahorrar 100 pesos a la semana para tener un guardadito propio. Es una manera de agradecer y reconocer el trabajo que personas ajenas a Unión Hidalgo están realizando para la reconstrucción. Es un modo de organización en el cual, el liderazgo es ejercido por una mujer distinta cada día. Y es también un sueño.

“Vamos a seguir trabajando porque queremos construir un comedor en forma, que además sea un espacio para mujeres donde podamos aprender lengua zapoteca, bordado o cocina; y poco a poco ir formando una asamblea de mujeres que participemos más en las decisiones importantes de la comunidad, ese es el futuro que queremos”, dice Rosalva.

A casi un año del sismo del 7 de septiembre, se reporta poco avance en la reconstrucción en Unión Hidalgo; de las 1882 viviendas con pérdida total, 471 registran un avance menor al 25% y solo 205 han sido reconstruidas, es decir, el equivalente al 10.89%.

*Texto originalmente publicado en <https://www.oxfamMexico.org/historias/mujeres-que-alimentan-la-reconstruccion> y actualizado para esta edición de Brújula Ciudadana.

ESCAPARATE CIUDADANO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL OBSERVATORIO BINACIONAL DEL VOTO EXTRATERRITORIAL

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., por medio del Observatorio Binacional del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, realizó por segunda ocasión, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, actividades de observación electoral enfocadas a la población residente en Estados Unidos. El resultado de la observación permite presentar recomendaciones en tres ámbitos: las instituciones electorales locales y nacional; reformas legislativas; y la agenda pendiente en materia de atención a la comunidad migrante.

Instituciones electorales

Las actividades desarrolladas por los institutos electorales contribuyeron al crecimiento sustantivo de la participación de la ciudadanía residente en el extranjero; no obstante, es necesario fortalecer áreas de oportunidad enfocadas a la vinculación y empoderamiento de la ciudadanía. Técnicas Especializadas.

- 1 Integrar de forma permanente estructuras institucionales de atención al voto de la ciudadanía en el extranjero con la creación de Unidades Técnicas Especializadas.
- 2 Revisar el proceso integral de voto desde el extranjero en sus tres etapas, particularmente, en el registro de electores y mecanismo de votación.
- 3 Promover la capacitación y vinculación institucional.



Reformas legislativas

La reforma 2014 ofreció herramientas a las instituciones electorales, pero el desarrollo del proceso electoral 2017-2018 mostró áreas que requieren de atención para contribuir al empoderamiento de la ciudadanía residente en el extranjero y que deben ser atendidas mediante reformas legales.

1 Creación de Unidades Técnicas del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

2 Mecanismos de representación.

3 Garantías plenas a la militancia partidista para el ejercicio de sus derechos políticos en el extranjero.

Agenda de atención a migrantes

Tanto a nivel federal como a nivel de las entidades analizadas las agendas enfocadas a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos siguen mostrando profundas omisiones y, en ocasiones, una franca desatención.

1 Políticas para atender necesidades de Protección y Seguridad Jurídica.

2 Defensa al derecho a la identidad.

3 Programas de Vinculación.

4 Mediación por una Reforma Migratoria Justa y Humana.

5 Fortalecimiento de la diplomacia federativa.

6 Empleo y capacitación laboral.

7 Atención al retorno forzado.

8 Fortalecimiento al Estado de Derecho en México.





PÁGINA WEB:

www.iniciativaciudadana.org.mx



Iniciativa
Ciudadana PCD



@iniciativa_pcd



<https://www.youtube.com/user/Iniciativapcd>

BRÚJULA CIUDADANA 102

TELS. 5514 1072 / 5525 8232 / 5525 8276

XIOMARA PERAZA

EDITORA DE LA REVISTA BRÚJULA CIUDADANA

xiomara.peraza@iniciativaciudadana.org.mx

JUDITH MELÉNDREZ BAYARDO

DISEÑO Y EDICIÓN

judithmelba@gmail.com

